

PERFIL ACTUAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MÉXICO

René GONZÁLEZ DE LA VEGA

En relación con el tema “El Ministerio Público en México y en el mundo”, y en atención al tiempo que se nos ha asignado —por razón natural muy breve—, trataré de establecer simplemente un esbozo general, un perfil del Ministerio Público actualmente en México, como lo veo, como lo vislumbro, su actuación hoy en día, para después tratar de hacer algunas propuestas o proyecciones desde un enfoque, estrictamente personal.

Todos sabemos, por lo menos los mexicanos, que el Ministerio Público en México vive, hoy por hoy, un protagonismo extraordinario. Un protagonismo extraordinario en nuestro quehacer nacional, en nuestro decir nacional; se habla en todo momento de él, aunque no siempre bien; se le mira todo el tiempo y no siempre con buenos ojos, esto hay que reconocerlo.

¿A qué se debe ese protagonismo? Bueno, entre muchas razones, a dos factores fundamentales. Evidentemente, al recrudecimiento del delito en nuestra República; a la aparición de figuras y comisiones delictuosas de especial escándalo, que han ubicado al Ministerio Público en el centro del debate nacional y de la acción nacional. A esto se suma, también, una sociedad mexicana mejor informada, más demandante. La mezcla de ambos ingredientes ha generado eso precisamente: un enorme debate nacional sobre la institución del Ministerio Público y sobre su eficiencia.

Pero, las preguntas que se nos antoja hacer inmediatamente son ¿esta institución está debidamente pertrechada, cubierta?, y ¿cuenta con los elementos de distinta naturaleza que debe tener, para enfrentar este protagonismo emergente?

Yo creo que, sin mucha reflexión, las respuestas inmediatas que daríamos es no; absolutamente no está bien pertrechada y no cuenta con los elementos para enfrentar ese protagonismo.

Enfrenta el Ministerio Público este protagonismo sin los mejores elementos, o los que tiene en muchas ocasiones son obsoletos o anacrónicos y en muchas otras, cuando llegan a servir o se pretenden desarrollar en esta institución, siempre se les regatea en todos sentidos. Así, el ámbito de su marco legal, de su organización y estructura, en torno a la profesionalización de sus cuerpos de

servidores públicos, su relación con la comunidad, en el mejor de los casos está “marchita”, totalmente anulada, en el momento actual.

Esto, claro, se debe a rezagos de muchas naturalezas ocurridos durante las últimas décadas; a inercias que seguimos viviendo, a desvíos en su actuación, a esos anacronismos a los que ya me referí.

Todo esto ¿qué resultado nos da? Una institución inconfiable, con una muy mala imagen pública, que genera frustración en las instituciones públicas, en el gobierno; que produce irritación social, por supuesto, y le da a la sociedad una sensación de inmoralidad, de burocratismo excesivo, de desatención, de inseguridad pública y, lo que es más grave, de impunidad.

A pesar de que es innegable que en los últimos tiempos ha habido esfuerzos muy importantes para mejorar, desarrollar y promover esta institución noble, con la que contamos en México, que es el Ministerio Público, a pesar de sus esfuerzos y de los recursos crecientes que se canalizan, pareciera que no se acaba de encontrar el rumbo adecuado para una actuación meritoria del Ministerio Público.

En este diagnóstico no hay mérito alguno, lo sabemos todos; se comenta todos los días, pero finalmente nos sirve para ubicar pronto y bien una necesidad inmediata.

Tenemos que revisar en el Ministerio Público su pasado histórico, este presente tan debatido y tratar de encontrar alguna proyección viable para el futuro inmediato.

Todos sabemos que surgen y se fortalecen las nuevas corrientes del derecho penal humanitario, y últimamente, con una extraordinaria fuerza, las corrientes de protección, preservación y defensa de los derechos humanos. Así se establecen para su consecución las instituciones legales, administrativas, organizacionales, de procedimientos, y esto ¡qué bueno y en buena hora que suceda!

Así lo concibió el Constituyente de 1917, y si nos ubicamos en aquella época, cuando el Congreso debatía los diversos artículos de la Constitución, yo recordaría que, al llegar al artículo 16, se establecieron algunas de las principales garantías individuales en nuestra cara magna relativas, precisamente, a cuestiones penales y procesales.

En los debates, los diputados Jara, Palavicini y algunos otros, de manera muy distinguida, al crearse el Ministerio Público como lo concebimos hoy en México, se le conoció como un órgano técnico, de buena fe; un órgano que investigaría los delitos y que mantendría acusaciones ante el Poder Judicial. Todo esto en contra del sistema porfiriano que la Revolución derrocaba y tenía en mente en los debates, así se refleja, a los famosos, tristemente famosos, jefes políticos del porfirismo, quienes detenían a personas de manera totalmente arbitraria.

El Constituyente creyó fervientemente que con la aparición de la figura del Ministerio Público, por un lado, y del municipio libre, por el otro, todo se solucionaría de una manera adecuada, y que entraríamos de lleno a un ejer-

cicio de ese derecho penal humanitario y al respeto cabal de las garantías individuales.

A pesar de este planteamiento original del Constituyente de 1917, durante las décadas que siguieron al Ministerio Público se le regatearon todas sus funciones. Siempre se le atribuyó esa autoridad administrativa, que no podría detener sino por orden de un juez, y poco a poco fue pasando de una época del abuso, a una época de la ineficacia absoluta.

En este momento, el Ministerio Público se debate en ese claroscuro dramático de nuestra historia. No es, hoy por hoy, una institución que a los mexicanos nos sirva, nos sirva bien, y de la que estemos cabalmente satisfechos.

Tenemos distorsiones en esta institución, principalmente de tipo conceptual; la población no sabe si el Ministerio Público es un investigador de delitos, que siempre llega tarde, un policía o un fiscal.

Ante estos argumentos, para algunos sería recomendable cancelar el Ministerio Público. Yo creo que no sería esa la respuesta, ni sería sano, ni inteligente pensar así.

Ante esta perspectiva, se requiere de un Ministerio Público que sea realmente un investigador y que cumpla eficazmente en la fase de la averiguación previa, que el policía judicial se subordine realmente al Ministerio Público. Un Ministerio Público conocedor y diestro, hábil, que pueda vencer en juicio y convencer con sus argumentos.

¿Qué hacer con la víctima del delito? Hay una lucha permanente entre el Ministerio Público y la víctima. Ese concepto de representante social parece que acaba derrotando, finalmente, al directamente afectado por la comisión delictuosa.

En materia de prevención del delito, es evidente que las procuradurías trabajan, pero ¿será o no responsabilidad del Ministerio Público?, y ¿en qué medida debe resolver estas tareas de la prevención del delito? Hoy, en el mundo, la prevención es el instrumento o la piedra de toque fundamental, mucho más que las actividades represivas de cualquier naturaleza.

Y en cuanto a la política criminal, ¿cuál es, por lo menos en México, el papel del Ministerio Público?, ¿quién la dicta?, ¿quién la emite?, si los distintos componentes del sistema de justicia y seguridad pública están divididos. Por disposición del artículo 14 transitorio de la Constitución, no contamos en México con un Ministerio o Secretaría de Justicia, y entonces ¿quién se hace cargo de diseñar e impulsar la política contra el crimen de México? ¿Qué sucede con las promociones y las vías alternas, en cuanto a la solución de conflictos? Me refiero al arbitraje y a la conciliación. ¿Puede el Ministerio Público asumir ese tipo de funciones?, como de hecho lo está haciendo y como la sociedad lo demanda, o ¿rebasas sus atribuciones constitucionales y legales? Pareciera que ahí hay otro punto de indefinición, en donde el Ministerio Público se ve vulnerable y tambaleante todos los días.

En México, diseñamos para la investigación de los delitos una trilogía compuesta por el Ministerio Público (el líder de la investigación y sus auxiliares), la policía judicial y los servicios periciales. En realidad ¿qué sucede?: el Ministerio Público se convirtió en un abogado burócrata, sentado en un escritorio, girando oficios de “investíguese”, “localícese”, pero sin dirigir realmente la investigación. Un policía judicial, pues, sin líder ni mando, que en el mejor de los casos estaba al mismo nivel del Ministerio Público —cuando no, de hecho, superior a él—, prepotente y descalificado para investigar. Y además, por los abusos en que incurrió; hoy por hoy, la policía judicial mexicana está ayuna o le han amputado todas las facultades; no puede recibir denuncias, no puede recibir confesiones, no puede realizar investigaciones por sí misma, y su jefe es ese burócrata que gira oficios. Los servicios periciales, permanentemente en sus laboratorios, haciendo pruebas, pero totalmente desligados del medio natural de la comisión delictiva y del escenario delictivo.

Creo que esta trilogía no ha dado resultados. Tenemos que poner el dedo en la llaga y ser muy autocríticos. Los mexicanos tenemos que encontrar pronto —y bien— un nuevo rumbo para generar un verdadero investigador de lo criminal.

Por lo que se refiere al proceso, ¿cuál es el papel del Ministerio Público?, ¿es un acusador de oficio, un pertinaz persecutor, solicitante de penas?, o ¿debe ser un abogado de buena fe? Si nos colocáramos en el absurdo de que el agente del Ministerio Público supiera que está ante un inocente, ¿mantendría su acusación a “rajatabla”?, ¿apelaría ante una sentencia absolutoria por el simple hecho de seguir apelando y continuar con el procedimiento penal en segunda instancia? ¿Cuál es el papel de la defensa en materia penal? ante un culpable, a sabiendas de que lo es?, ¿defenderlo a ultranza y tratar de obtener la libertad de ese delincuente? Yo creo que el “dar a cada quien lo suyo” del derecho romano en materia penal se debe aplicar de manera muy diferente. Hay personajes distintos. Está la sociedad ofendida, la víctima misma, el Estado, el Ministerio Público, la defensa, la figura del juez, el reo. Evidentemente, yo creo que el Ministerio Público, más que ser un solicitante de penas de oficio, un “Torquemada” moderno, debe ser una institución que vigile que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que éstas se cumplan. Y la defensa debe vigilar que se respeten las garantías procesales a su cliente.

Si estas dos partes cumplen ese procedimiento, se habrá cumplido la justicia penal, cualquiera que sea la sentencia, culpable o inocente; se habrá resuelto la justicia penal como debe ser, porque finalmente la justicia penal no se parece de ninguna manera a otro tipo de justicia, como la civil, la mercantil, la agraria, la laboral o de otras naturalezas. Pero sí tenemos que revisar el papel del Ministerio Público en la investigación y en el proceso.

Tenemos que especializar al Ministerio Público, pues hasta la fecha ha sido —perdónenme la expresión— “todólogo”. En fin, tenemos que ampliar la cultura mexicana en cuestión del Ministerio Público.

Finalmente, después de esta breve exposición, me gustaría decir que tal vez habría que pensar en la fase investigadora del Ministerio Público, cuando es autoridad, si pudiéramos ubicarlo dentro del Poder Ejecutivo; pero sí podríamos ir pensando en una figura del fiscal, del perseguidor en proceso, con objeto de que pueda tener una característica autónoma como la tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Federal Electoral, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal o algunos otros órganos en la moderna administración pública mexicana. Creo que tenemos los instrumentos para lograrlo. Lamento dejar de lado muchos temas, pero el tiempo es implacable, y les agradezco su atención.